

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez-Parga. 1982-1991
Editor: Fredy Rivera Vélez
Asistente General: Margarita Guachamin

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE. Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: US\$. 9

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 12

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$. 3

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Tel: 2522763 • Fax: (593-2) 2568452

E-mail: caap1@caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

Magenta

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazul Offset

ECUADOR DEBATE

63

Quito-Ecuador, diciembre del 2004

PRESENTACION / 3-6

COYUNTURA

Los callejones oscuros del TLC / 7-20

Marco Romero Cevallos

Historia de una acusación (por el momento) abortada:

actores y motivaciones / 21-38

Fernando Bustamante

Conflictividad socio – política / 39-46

Julio-Octubre 2004

TEMA CENTRAL

Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador / 47-62

Jeannette Sánchez

Formación de los condicionantes económicos para las migraciones internacionales / 63-88

Saskia Sassen

Migrantes ecuatorianas en Madrid: Reconstruyendo identidades de género / 89-102

Heike Wagner

Ascendiendo en la “escala agrícola”: movilidad social y motivaciones migratorias / 103-120

Diane C. Bates y Thomas K. Rudel

Relaciones de género entre migrantes ecuatorianos en el nuevo contexto de “la Rambla”, Murcia: Un acercamiento desde la Antropología / 121-152

Pilar López Rodríguez -Gironés

¿Pueden las remesas comprar el futuro?

Estudio realizado en el cantón San José de la Labor,

Municipio de San Sebastián, el Salvador / 153-184

Blanca Mirna Benavides, Xenia Ortíz, Claudia Marina Silva, Lilian Vega

DEBATE AGRARIO

La comunidad campesino/indígena como sujeto socioterritorial / 185-206

Hernán Ibarra

Formación y transmisión de precios en la cadena agroalimenticia
trigo-harina-pan / 207-234

George Sánchez Quispe y Katia Carrillo San Martín

ANÁLISIS

Los misioneros salesianos y el movimiento indígena de Cotopaxi,
1970-2004 / 235-268

Carmen Martínez Novo

"La 'nacionalización' y 'rocolización' del pasillo ecuatoriano" / 269-282

Ketty Wong

RESEÑAS

Pablo Ospina / 283-286

Hernán Ibarra / 287-288

Juan Fernando Regalado / 289-290

Historia de una acusación (por el momento) abortada: actores y motivaciones

Fernando Bustamante

Queda claro que en estos momentos, la ID y el PSC se han convertido en guardianes de un orden político en el que su papel es central, y en el cual podrían aspirar a convertirse en una coalición consociativa dominante. La alianza establecida por estos partidos en contra de Gutiérrez se arraiga en poderosas motivaciones estratégicas de antiguo origen y por tanto, no pueden entenderse como resultado de caprichos momentáneos o disputas coyunturales. Los factores personales, en definitiva, solo juegan un rol importante si la estructura de la situación es tal que permita que el papel de los humores pueda tomar importancia.

Al momento de escribirse estas líneas, el Presidente de la República, Coronel Lucio Gutiérrez parece haber sorteado con éxito un intento de destituirlo mediante un juicio político en el seno del Congreso Nacional.

La acusación fue patrocinada por una abigarrada y aparentemente dispar coalición de partidos políticos, que incluyen a los Social Cristianos, Izquierda Democrática y Pachakutik. Los cargos contra el Presidente Gutiérrez incluían el delito de peculado, por haber –supuestamente– utilizado fondos públicos en la promoción de los candidatos de su partido (la Sociedad Patriótica 21 de Enero), durante la campaña correspondiente a las recientemente realizadas elecciones municipales y provinciales. Adicionalmente, Pachakutik ha logrado incorporar a la acusación por pe-

culado la de “traición a la patria”, por haber permitido o consentido que naves de guerra estadounidenses interceptaran y hundieran navíos de bandera ecuatoriana que transportaban presuntos inmigrantes ilegales ecuatorianos, con destino a los Estados Unidos.

Aunque la acusación parece haber fracasado en reunir los votos necesarios para seguir adelante con el juicio, sus promotores han indicado que seguirán buscando la manera de reavivarla. Más allá de que logren o no sus objetivos, es tal vez el momento de analizar las razones por las cuales los distintos actores se han embarcado en una confrontación tan drástica y tratar de entender por qué la circunstancial oposición ha debido recurrir a un intento tan extremo en la búsqueda de sus objetivos. Por otra parte, todo indica que el Presidente puede todavía utilizar los considerables recur-

sos clientelares a disposición del jefe del poder Ejecutivo y recurrir a las tradicionales prácticas de intentar romper la disciplina de los partidos opositores mediante ofertas dirigidas a los intereses particulares de determinados legisladores y de sus circunscripciones. De hecho, a estas alturas es evidente que los acusadores van a tener serios inconvenientes en mantener su bloque unido y llevar adelante sus intentos. En todo caso, es preciso tener presente el precedente que constituye la destitución y encausamiento penal del ex vicepresidente Dahik: aunque éste fue absuelto por el Congreso, los acusadores se valieron de una acción judicial en su contra para conseguir su alejamiento del poder y de la política nacional. Es factible imaginar una maniobra de última instancia, por medio de la cual, un informe de Contraloría o de alguna otra autoridad fiscalizadora, diera pie para que la Corte Suprema, o cualquier otro tribunal, emita una orden de arresto contra Gutiérrez, aún sin el precedente de un voto parlamentario en su contra. Dada la profunda confusión que envuelve a las jurisdicciones en el orden legal, la debilidad del estado de derecho, y dada la extrema politización de la justicia y de la propia Corte Suprema, incluso un acto audaz de alguna instancia judicial, podría ser interpretado como suficiente razón y justificación para seguir adelante con el derrocamiento (con apariencias legales) del Presidente en ejercicio.

En el artículo que sigue se intentará realizar un análisis de las motivaciones y estrategias que subyacen a este nuevo intento de desestabilización política, que, al igual que otros anteriores, (1997

y 2001) se intenta cubrir con un manto de legalidad, o al menos de pseudo-legalidad. Estas apariencias de legalidad, por cierto, cumplen funciones ideológicas y prácticas muy importantes, pero se intentará mostrar que en realidad nada tienen que ver con un efectivo acatamiento del estado de derecho, o peor aún, con algún intento de preservarlo de abusos Presidenciales o de la corrupción gubernamental. Más allá de la suerte que puedas correr el juicio político a Gutiérrez, es tal vez el momento de detenerse y entender cuáles son las dinámicas de poder que subyacen a esta intentona y la lógica de los actores involucrados, y en especial de los tres partidos patrocinantes de la acusación.

¿Por qué Febres Cordero quiere la destitución de Gutiérrez?

¿Cuál es el propósito estratégico de los distintos agentes involucrados en la acusación constitucional en contra del Presidente Gutiérrez? Para responder a esta pregunta es preciso entender los intereses propios de cada cual y ver la manera como estos intereses se conjugan y convergen sobre una estrategia de derrocamiento (legal, puesto que otras formas son de muy difícil legitimación, sobre todo en un contexto internacional que da un virtual poder de veto a actores extra-nacionales).

Y para ello debemos remitirnos, en primer término a las colectividades partidarias que se hallan asociadas en esta empresa. De ellas, la más importante es el Partido Social Cristiano. Esto tanto por su fuerza intrínseca, por el control que sus líderes ejercen sobre el poder judicial y sobre numerosas autoridades

regulatorias y fiscalizadoras y, además, por el enorme peso electoral y financiero que lo respalda.

¿Qué mueve al PSC a lanzarse en una empresa tan drástica en contra de un presidente que hasta solo unos pocos meses hacía los más denodados esfuerzos por congraciarse con sus dirigentes y por satisfacer todas a sus demandas políticas?. Sobre este punto se pueden establecer algunas observaciones. En primer término no es posible entender la postura del PSC sin comprender, al mismo tiempo, los intereses y la voluntad de su jefe, el ex Presidente León Febres Cordero. De hecho, el PSC opera, -casi por completo-, como un aparato de proyección del poder personal de Febres Cordero y de su círculo íntimo. Aunque es posible separar analíticamente los presuntos intereses del partido como colectividad, de los de Febres Cordero como "líder" personalista; debe tenerse muy en cuenta que, estas diferencias, en la medida en que existen, solo pueden manifestarse en tanto que Febres Cordero y su entorno lo permitan y den paso a la expresión de tales preocupaciones. El PSC, se ha convertido (si alguna vez fue otra cosa), en una organización patrimonialista, donde el poder personal y privado del dirigente es inseparable del de la organización, tomada como un conjunto. En esto, por cierto, el PSC no se halla solo, puesto que a su lado (y en competencia con él) se ubican otros partidos-patrimonio, ● empresas electorales privadas, como son el PRE de la familia Bucaram y el PRIAN de la familia Noboa. Es verdad que debe tenerse presente que el PSC interpreta -por lo general- con bastante

· fidelidad- los intereses y la cosmovisión de la elite empresarial Guayaquileña, o al menos de ciertos sectores de ella, quienes se encuentran allegados a la maquinaria política montada por Febres Cordero y Jaime Nebot en el puerto principal. Pero, esta afinidad, pasa no tanto porque el PSC sea un partido de clase, sino por el fuerte inbricamiento de negocios y de empresas entre la "familia" social cristiana y buena parte de la elite del puerto. A ello debe agregarse el peso abrumador de la hegemonía política municipal que termina generando una dependencia estructural entre la empresa privada de Guayaquil y los operadores políticos de la "familia" social cristiana, la cual monopoliza el control de acceso a las decisiones públicas, a recursos y a la protección de los negocios.

De esta forma, es muy difícil separar lo que son los negocios clánicos de la familia extensa y el círculo de deudos de Febres Cordero, del interés partidista y de las necesidades de reproducción (por otra parte, fuertemente marcadas por el clientelismo mercantilista) de una amplia y fuertemente interconectada serie de núcleos empresariales porteños. De esta forma, no es posible distinguir claramente lo que es el interés "personal" o "familiar" del clan Febres Cordero y de sus adláteres, de algún tipo de interés más "universalista" o de clase. De hecho, cabe dudar que la organización social de las empresas ecuatorianas, y, por cierto de las Guayaquileñas, obedezca a un patrón clasista, y no, como puede especularse, a una estructura de redes familísticas interconectadas, pero en ningún caso unidas por una co-

mún pertenencia a una determinada posición dentro de la división social del trabajo. Más bien se trata de "núcleos" reticulares de influencia definidos por la pertenencia o adscripción a focos de poder social y de capital político, constituidos, a su vez por el manejo de formas de influencia y de lealtades patriarcales.

La acusación constitucional parece insertarse dentro de estas estrategias que se mueven a medio camino entre lo particular y lo corporativista, entre lo familiar y lo estamental y entre lo personalista y lo comunitario.

Parece claro, a estas alturas, que el partido Social Cristiano, y el clan de Febrés Cordero, en particular, han llegado a la conclusión de que la permanencia de Gutiérrez en la Presidencia ya no es redituable bajo las actuales condiciones. Durante el período que va entre agosto del 2003 y Julio del 2004, el PSC se abstuvo de atacar a Gutiérrez ("concederle apoyo" parece un término excesivo), a cambio de la disposición de éste a dejar que los dirigentes del PSC dictaran las políticas públicas en función de sus intereses seccionales y grupales. Sin embargo, las concesiones que Gutiérrez estaría dispuesto a hacer parecen haber alcanzado un tope y el brutal chantaje Social Cristiano habría llegado al punto que prácticamente impedía al presidente y su propio "entourage" captar los recursos y privilegios necesarios para montar su propia red clientelar, usando para ello su control de aparato público formal.

El juicio político a Gutiérrez puede ser una estratagema para presionar al Presidente y "ponerlo en su lugar": o

sea, para obligarlo a negociar en desventaja. Es sintomático que la acusación sea presentada a los pocos días de las elecciones de locales que se celebraron en el mes de Octubre del 2004. Los Social Cristianos parecen haber llegado a la conclusión que el veredicto de las urnas confirmaba plenamente su papel como primera fuerza política a nivel nacional: Pero, al mismo tiempo, y contrariamente al discurso y los análisis hechos por la prensa y los medios de comunicación; el Presidente considera haber logrado su objetivo de salvar la existencia de la Sociedad Patriótica. El hecho de haberlo logrado aún después de año y medio de desgastante gestión presidencial, indica bien a las claras que los tradicionales recursos del clientelismo y de la munificencia patricia, siguen siendo eficaces a la hora de obtener votos, sobre todo en áreas rurales, pequeñas ciudades y provincias alejadas de los grandes centros demográficos, políticos y económicos de la nación. El mensaje es claro: si se controla recursos estatales, si se dispone del aparato del poder, si es posible movilizar recursos gubernamentales, financieros o de otros tipos; no importa el juicio de la opinión pública, ni tampoco la calidad del discurso político; la ideología y la coherencia de las propuestas: siempre será posible consolidar una clientela electoral y una red de apoyos sociales construida sobre la base de las prácticas tradicionales del mecenazgo cívico del poderoso. Es la misma enseñanza que se desprende del relativo éxito del clan Noboa Puntón para lograr una significativa votación, que le permite acercarse o igualar al PRE en materia de apoyo ciudadano.

De esta forma, se hace posible co-legir, que una permanencia más prolongada en el poder, por parte de Lucio Gutiérrez, podría permitirle consolidar sus actuales avances y proyectarlos con más fuerza aún, en el futuro mediato. La dificultad se agrava por el hecho de que el alto precio del petróleo y una economía con algún dinamismo, pueden procurarle a la caja fiscal un alivio prolongado. Con las variables macroeconómicas bajo control y con holgura económica, el Ejecutivo podrá ir orientando parte de sus fondos y de sus márgenes de maniobra financieros hacia la construcción de una máquina electoral que le convertiría en un contendor complicado en futuras lides electorales. En otros términos: Lucio Gutiérrez es débil, pero podría dejar de serlo y existen ciertos factores que harían temer la posibilidad de que el actual gobernante estuviese en condiciones de lograr forzar su entrada en el círculo estrecho de los "grandes electores" de la política Ecuatoriana (junto con Febres Cordero, Nebot, Bucaram, Noboa Pontón, Borja y el movimiento indígena).

Pero, existen otros potenciales focos de interés en desestabilizar al Presidente Gutiérrez o someterlo mediante una brutal extorsión. Parece evidente -aunque el tema pertenece a aquel oscuro y soterrado mundo de las conspiraciones mafio-palaciegas-, que en algún momento el Presidente Gutiérrez decidió enfrentar a la máquina social cristiana, en vez de seguir sometiéndose a ella. Es posible que los asesores de Gutiérrez hayan llegado a la conclusión de que -de acuerdo a patrones aparentemente ya bien establecidos- el PSC y Febres

Cordero aplicarían la fórmula del "trapi-che" (ya bien probada con otros Presidentes) y que en el momento en que el acosado Primer Mandatario ya no pudiese satisfacer sus siempre crecientes e insondables exigencias; procederían a "deshacerse" de él para reemplazarlo con otro funcionario más dúctil y capaz de hacer nuevas concesiones.

De esta forma, es posible que los estrategas políticos de Carondelet hayan decidido que era preciso romper con Febres Cordero antes que éste iniciara su propio proceso de defección. Ante la inevitable ruptura, parecía preferible golpear primero y atacar antes. Sintomático de ello, ha sido el hecho de que ya antes de iniciarse la campaña electoral el primo del presidente, el diputado René Borbúa, haya abierto hostilidades contra Febres Cordero iniciando una campaña de denuncias en su contra. La aparente decisión de Gutiérrez de usar la AGD para presionar los grandes deudores y el hecho de que familiares y miembros del círculo de Febres Cordero aparezcan involucrados, hace pensar que el líder del PSC siente que este conflicto se ha convertido en una lucha personalizada entre el clan emergente de Gutiérrez y el suyo propio.

De esta forma, Febres Cordero intenta derrocar o poner de rodillas a Gutiérrez a fin de protegerse y proteger los negocios de sus allegados. Pero al mismo tiempo, existen otras perspectivas que podrían estar alimentando el conflicto.

Es preciso tener un enfoque de plazo algo más largo respecto a los intereses que se juegan los Social Cristianos en esta nueva peripecia. Y para ello es

pertinente entender el papel crucial que sigue jugando el Estado como foco de la acumulación económica en el Ecuador. El sistema de finanzas públicas sigue siendo el principal centro de acumulación de capitales que tiene el país, especialmente porque a raíz de la dolarización, la inflación ha dejado de ser un importante recurso de renta. Asimismo, las perspectivas de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Perú y Colombia, amenazan con socavar seriamente al proteccionismo comercial y a los subsidios gubernamentales tradicionalmente establecidos, los que son otra fuente acostumbrada de ganancias rentistas para ciertos sectores mercantilistas de la empresa putativamente privada. El esperado debilitamiento de las barreras proteccionistas así como de la posibilidad de amparar los monopolios mercantilistas (grupos privados o gremiales que cuentan con una protección estatal, bajo la forma de "derechos adquiridos"), amenaza seriamente la viabilidad empresarial de importantes grupos corporativos, sobre todo vinculados al comercio exterior (los que se hallan sobre-representados en la elite de negocios establecida en Guayaquil).

En fin, todo el sistema de transferencia de recursos que crónicamente ha fundamentado la relación entre el estado y los grupos gremiales rentistas, se halla crecientemente comprometido. El grupo de Febres Cordero, es uno de los núcleos centrales de este sistema de redes corporativistas y patrimonialistas que han manejado determinada franjas del excedente estatal a partir de su poderío político y gubernamental. El problema acuciante que aqueja a estos gru-

pos, estriba en la necesidad urgente de encontrar fuentes de ingreso y de renta que reemplacen a las tradicionalmente derivadas de la devaluación y del proteccionismo. Las candidatas son básicamente tres: a) subsidios y transferencias directas por la vía de políticas compensatorias y, preferentemente a través de "unidades ejecutoras" y de la privatización del manejo de ciertas franjas del presupuesto fiscal. Esto incluye preasignaciones, corporaciones de desarrollo, programas crediticios, etc., pero sometidos al control de los propios beneficiarios, b) el control del negocio petrolero. Esto no significa un proyecto de privatización: los grupos o redes político-empresariales saben que carecen de los capitales, tecnología y competencias para adueñarse directamente de la industria petrolera. No pueden pretender ser los operadores directos de esta actividad. Pueden, en cambio, constituirse en partícipes de la esperada expansión de la explotación hidrocarburífera, la cual ha vuelto a ser un negocio de enormes perspectivas, a partir de la esperanza (aparentemente bien fundamentada) de un largo período de precios altos, durante los próximos años. ¿De qué forma?: básicamente de dos maneras: 1) controlando la parte que el Gobierno central percibe por la vía de regalías y otros pagos: no es necesario controlar los pozos, si se puede controlar una porción de los fondos que estos pozos producen: en este caso, la idea es convertir al Estado en un mero cobrador que luego reasignará los recursos entre las mafias político-empresariales, en función a la capacidad de chantaje político que cada una tenga (y, por cierto, la de Fe-

bres Cordero aparece como la más importante). II) La segunda forma, es controlando las políticas y la gestión petrolera del Estado, para así asegurarse que todo participante privado extranjero o nacional deba compartir el excedente bajo la forma de sub-contratos, comisiones, sociedades, participaciones o tercerizaciones. En otras palabras, se trata de convertirse en lo que en inglés se denomina "gatekeepers", o sea, los que controlan el acceso. Los grupos mafiosos político-empresariales, no pueden operar el sector petrolero, pero poseen un recurso poderoso: su control del aparato de toma de decisiones: si pueden optimizar su manejo de este aparato, pueden convertir su control del acceso en rentas y sustanciosos negocios, extorsionando al sector privado para obligarlo a "pagar peajes" como condición de entrada. Estos "peajes" no tienen porque ser ilegales (aunque probablemente incorporen una dosis de ilegalismo, especialmente con empresas sometidas a organismos regulatorios relativamente más laxos), pero en todo caso implican una participación importante en los excedentes petroleros en pleno crecimiento. Cabe recalcar por qué es importante afianzar el control del estado ahora: se trata de la confluencia de una serie de procesos que tiende a limitar y asfixiar las posibilidades de monopolización rentista de excedentes económicos y el enorme crecimiento de las regalías petroleras y de las perspectivas futuras en caso de hacerse posible concretar nuevas inversiones. En todo caso, la dirigencia Social Cristiana y las de otros grupos mafioso-políticos no van a permitir que esos contratos se cierren si no

son ellos los que están a cargo del proceso en su calidad de "gatekeepers". Mientras tanto estarán dedicados a una política de no comer ni dejar comer.

Otro síntoma de las bases del problema se vincula al tema del FEIREP. El Gobierno del presidente Gutiérrez se ha negado sistemáticamente a ceder a las pretensiones de ciertos grupos (con el PSC a la cabeza) de modificar las normas que rigen el FEIREP. Los fondos allí depositados están primordialmente consagrados a la recompra de la deuda externa. Esta recompra es un compromiso establecido entre los Ministros de Economía, Pozo y luego Yépez; con la comunidad financiera multilateral. Esta operación es una de las garantías exigidas a fin de reestablecer la credibilidad de la economía y de la gestión pública de las finanzas. A pesar de que incluso desde sus propios partidarios el Presidente ha sufrido presiones (algunas vestidas de una aparente crítica a la ortodoxia macroeconómica); por el momento, el Ejecutivo parece convencido de que el destino de su gestión depende, en definitiva, de cumplir con estos compromisos con las multilaterales. Por tales razones, sean estas buenas o malas, el hecho es que el fuerte y no anticipado excedente petrolero alimenta el FEIREP y no la holgura fiscal. Para los grupos rentistas políticos-empresariales, semejante acumulación de fondos en el FEIREP representa una operación carente de lucro inmediato o rédito político claramente aparente, y es por lo tanto, simplemente absurda y completamente irracional. Las redes clásicas esperan del Gobierno que haga lo que ha sido usual en épocas de bonanza: que reali-

ce una pródiga distribución de fondos entre las máquinas clientelares, y entre los grupos corporativos asociados a la concertación establecida de los poderes gremiales reconocidos y “apalancados” con el sector público.

Para la lógica habitual de los políticos Ecuatorianos, y en particular para el PSC, el control del Gobierno (aunque sea por métodos indirectos, como ha sido la práctica en los últimos diez años), representaría la posibilidad de reformar las leyes que rigen al FEIREP, y abrir las compuertas para la reasignación patrimonialista de los fondos allí acumulados. Por lo demás esta operación resultará “popular”, puesto que permitirá transferir parte de estas rentas a las masas clientelares, por vía de los organismos seccionales, unidades ejecutoras y proyectos de alta visibilidad, así como abaratar los costos del capital para a los grupos vinculados.

La racionalidad política del incipiente ataque contra el FEIREP, destinado a privatizar sus recursos; es solo una muestra de las tentaciones y urgencias que subyacen a la ofensiva contra el presidente Gutiérrez. Existe, por otra parte el temor (posiblemente bien fundamentado), que si algo de estos fondos puede ser canalizado hacia la inversión política, esto pueda hacerse a través de las incipientes redes clientelares del propio Presidente, o de alguno de los clanes que de manera harto circunstancial, por otra parte todavía lo apoyan.

Y, en realidad, mientras el Estado sea el propietario del petróleo y buena parte de la acumulación de capitales local dependa de este recurso, la política será el campo de batalla depredador de

los grupos patrimonialistas, en desesperada búsqueda de medios destinados a reproducir sus prácticas, su poder y su base política.

Además del agudizado problema del reparto del ingreso petrolero, la estrechez de los márgenes redistributivos ha dado renovada importancia a otros fondos, hasta ahora de expoliación menos urgente. En este caso se halla el ahorro de la seguridad social. En efecto, los capitales de la seguridad social eran, antes de la dolarización, “licuados” por el Estado. El mecanismo funcionaba de la siguiente manera: los trabajadores y empleadores pagaban sus cuotas para el seguro. Este dinero era acumulado, y sus excedentes eran “tomados prestados” por el fisco, con el fin de financiar el gasto corriente y los costos operacionales del Estado. Como es fácil suponer, tanto el gasto público como la inversión estatal encubren – en no despreciable medida – todo el complejo sistema de subsidios, transferencias y rentas que se han tejido en torno a la munificencia pública. En otras palabras, los grupos políticamente “apalancados” (clientelas, corporaciones, grupos político-empresariales, prebendados etc.), reciben sus ingresos por la vía de las decisiones de gasto público, que son en parte financiadas por el seguro social. Luego, las deudas del estado con el IESS son calculadas sin indexación, y la inflación se hace cargo del resto. Las deudas con el IESS se desvalorizan galopantemente, y, además, el fisco no tiene la obligación de pagar estas deudas, sino cuando su situación y prioridades así lo indiquen (cosa que nunca o raras veces ocurre). El uso de los fondos del IESS co-

mo "caja chica" de los Gobiernos, determina a lo largo de los años, una inmensa transferencia neta de recursos desde la población trabajadora hacia los grupos políticamente gravitantes, que usan de la largueza estatal como métodos de auto-reproducción.

Ahora bien. El fin de la inflación y la dolarización bloquean la posibilidad de licuar los dineros tomados al IESS en calidad de préstamo forzoso. Por otra parte, las nuevas estructuras de gestión del Seguro (vigentes desde principios de la actual década) hacen que ya no sea tan fácil simplemente ordenar los préstamos de esta institución para financiar las brechas fiscales. O sea, por un lado la plata que se toma prestada del IESS ya no se desvaloriza, y, por otra parte, el acceso del fisco a estos recursos se hace mucho más difícil, como lo atestigua el escándalo y la negativa de los directivos del IESS ante un intento de la propia Administración Gutiérrez para utilizar los supuestos ahorros provisionales para cubrir la brecha fiscal.

El resultado neto de todo esto es que el seguro-por primera vez en muchos años- mantiene excedentes financieros y puede acumular una reserva siempre creciente. Por cierto que el rígido e irracional sistema de manejo de estos fondos impide darles un uso eficiente y rentable para los ahorristas, pero, en la presente situación, esta nueva modalidad es un mal menor comparado con el abierto saqueo consuetudinario.

Pero el atesoramiento de estos fondos provisionales, genera la tentación de intentar controlarlos. Desde el punto de vista de la reproducción de las mafias patrimonialistas, los dineros del

IEES, son como los del FEIREP y los de las regalías petroleras, una tierra prometida y una presa tanto más codiciada, cuanto más asfixiante se hace el efecto del cierre de varias de las formas tradicionales de indisciplina fiscal o crediticia.

Por ello la urgencia Social Cristiana por controlar el estado: el control del estado significa el control de las regalías y de las políticas de inversión petrolera, significa el control del FEIREP y significa el control de los ahorros (ahora "duros") del Seguro. Debe insistirse, sin embargo, que este control no implica "gobernar", o sea poner a uno de sus miembros en el Gobierno. En realidad para los Social Cristianos ha sido mucho mejor, en los últimos 10 años, intentar controlar a los gobernantes que controlar al Gobierno. Gobernar significa asumir la responsabilidad por la gestión pública, y como muy bien lo saben León Febres Cordero y sus adláteres, la gestión pública pone a sus protagonistas frente al implacable tribunal de la opinión pública y ante la necesidad de rendir cuentas, de alguna manera, respecto de sus actos y políticas. Tal no parece ser el "negocio" Social Cristiano. Aún si la presente acusación constitucional llegase a prosperar, lo más probable es que el PSC insista en un interinato blando (con el vice-presidente Palacio o algún "designado" al estilo de Fabián Alarcón), pero claramente sometido a sus dictados: o sea un testaferró que haga los mandados del Social Cristianismo y que sirva de fusible ante los potenciales efectos políticos de decisiones destinadas a entregarle al partido y a sus padrinos las llaves de la acumulación nacio-

nal (al menos aquellas que aún no controlan). En efecto, el PSC ha descubierto la forma de tener todas las ventajas del Gobierno, sin padecer ninguno de sus costos y desventajas: sostener a Presidentes endeblés, precarios y extorsionados, que reciben instrucciones de Febres Cordero y de Jaime Nebot y que pagan todos los costos políticos de las decisiones así tomadas: así se hizo con Jamil Mahuad, con Fabián Alarcón, con Sixto Durán y, hasta hace pocos meses con el propio Lucio Gutiérrez.

Si el Presidente Gutiérrez no fuese un Presidente clientelar, el PSC podría bajar la mira un poco: en ese caso podría contentarse con la relativa certeza de que los pocos márgenes de maniobra existentes en el aspecto financiero fiscal, podrían no correr el riesgo de ser captados por una máquina prebendal alternativa a la propia. En tal caso, el PSC se contentaría con recibir garantías mínimas de que sus negocios presentes no serían tocados y que el Gobierno estaría dispuesto a acudir en su auxilio, si el peso de la evolución de la economía nacional o regional así lo requiere. Pero, en el presente caso, Gutiérrez ha dado muestras -torpe y limitadamente, pero muestra al fin- de estar considerando seriamente la opción de intentar montar su propia aventura político-empresarial, y ello complica seriamente los cálculos financieros y prebendales del PSC, sobre todo por cuanto para llevar adelante su proyecto, Gutiérrez ha buscado ahora aliarse a los otros dos fuertes competidores del Social Cristianismo: el PRIAN y el PRE. De esta manera, para el PSC existe el serio temor de una alianza de las tres empresas rivales, para limitar sus aspiraciones venales y eventual-

mente asfixiar la tubería de recursos con los que alimenta su propia maquinaria electoral y sus bastiones de reciprocidad y de control social en Guayaquil.

Los problemas de la Centro-Izquierda

A primera vista puede parecer sorprendente que la Izquierda Democrática y Pachakutik hayan decidido apoyar al Social Cristianismo en la intentona de destituir o juzgar políticamente al Presidente Gutiérrez. En efecto, estos dos partidos, y en particular el segundo de los nombrados, parecen hallarse en polos opuestos al PSC, tanto en lo ideológico como en actitudes y características psico-sociales básicas. No deja de ser extraña una coalición entre los partidos más supuestamente izquierdistas e ideológicos del espectro político con una agrupación a la cual consideran y han descrito tantas veces como portavoz de la oligarquía y de intereses ligados al capital y a la defensa del libre mercado.

Sin embargo, es evidente que tanto la ID como el MUPP privilegian en este momento sus rivalidades y hostilidad hacia la Sociedad Patriótica, por sobre las enormes diferencias -incluso antropológicas- que los separan de Febres Cordero y de su empresa política.

En las páginas que siguen nos adentraremos en un intento de entender las razones de fondo que llevan a estos dos partidos a aliarse con el PSC y hacer frente común con él en contra de Gutiérrez. Para comenzar analizaremos la evolución de las posiciones de la Izquierda Democrática.

Desde el día posterior a la victoria electoral de Lucio Gutiérrez, fue claro que la ID iba a tomar una actitud de ru-

da oposición hacia el recién llegado. Aparentemente, la ID se hallaba más cerca ideológicamente de la coalición que había llevado al poder al ex Coronel rebelde del partido de Febres Cordero y de su discurso, al menos aparentemente pro empresarial y librecambista. Parecía mucho más fácil para el partido social-demócrata entenderse con Pachakutik y con la SP, que acercarse a los populismos caudillistas con base electoral en la costa Ecuatoriana. Por otra parte, aún no es posible olvidar la larga trayectoria de enemistad, rivalidad y de agresiones que jalona la historia de las relaciones entre las dos más importantes colectividades políticas Ecuatorianas de los últimos 25 años.

A pesar de ello, otros tipos de intereses parecen ser mucho más importantes que la cercanía ideológica y la afinidad cultural. En efecto, dada la estructura electoral del Ecuador, la SP es mucho más una amenaza para la ID que el PSC. Esto se debe a que la SP puede competir por los electores social demócratas, mientras que el Social Cristianismo no parece estar en condiciones —al menos en un futuro cercano previsible— de disputar con éxito sus votantes a la ID. En otros términos, el sistema de “bastiones” electores determina que el PSC y la ID no sean competencia el uno para el otro. De hecho, existe la sensación que, en algún momento a mediados de la década pasada, tanto Rodrigo Borja como León Febres Cordero aceptaron el hecho de que les sería imposible arrebatar la hegemonía de la que la contraparte gozaba y goza en la Sierra y en Guayas respectivamente.

Para la Izquierda Democrática, Lucio Gutiérrez es un peligroso intruso,

que podría intentar montar en la zona Andina y en la Amazónica una replica del populismo de estilo Roldosista análogo al que simultáneamente desarrolla Alvaro Noboa con su PRIAN. Ni el PRE, ni el PRIAN son vistos como una amenaza comparable, básicamente porque no parecen estar en condiciones de disputarle a la ID sus bases electorales y regionales. Para la ID resulta por lo demás inquietante la sola posibilidad de un éxito de Gutiérrez en su gestión. Además, en tanto buenos conocedores del funcionamiento de la política cotidiana en el país, los dirigentes de la ID saben que en cuatro años de Gobierno, la SP puede aprovechar a fondo las ventajas del control del botín fiscal (aún en la menguada medida en que los condicionamientos de la comunidad financiera multilateral permite), para desarrollar una máquina prebendal y erosionar las bases de apoyo electoral de la ID, sobre todo en las provincias menores de la Sierra. Aunque en las ciudades mayores las estratagemas de mecenazgo cívico no necesariamente funcionan con tanta eficacia, en el hinterland andino-amazónico éstas pueden perfectamente acarrearle ventajas y apoyos al partido que utilice estas técnicas e instrumentos de ancestral potencia.

Aparte de esta territorialidad, es preciso tener en cuenta que la política histórica de la ID tiene ciertas constantes permanentes. Ha sido una política sostenida de la ID el poner como primera prioridad el impedir que surja cualquier otra alternativa del centro hacia la izquierda. Si se observa la conducta de sus dirigentes desde 1979, se podrá constatar que de manera sistemática, la ID ha preferido colaborar abierta o táci-

tamente con los populismos o con los sectores conservadores, si con ello se hacía más factible el quebrantar a otras agrupaciones u opciones de centro izquierda o de izquierda. A pesar de su ostensible enemistad con el partido Social Cristiano, el apoyo de la ID a esta colectividad ha sido un fenómeno recurrente, sobre todo cuando su adversario ha sido otro grupo de la llamada "centro-izquierda". La ID, por ejemplo apoyó a León Febres Cordero contra el presidente Oswaldo Hurtado, a pesar de que, al menos ideológica, programática y estilísticamente Hurtado estaba inmensamente más cercano a Rodrigo Borja y a la ID que el jefe del PSC. Asimismo, y de manera reiterada, la ID ha saboteado candidaturas centro-izquierdistas potencialmente alternativas, como las de Rodrigo Paz, Freddy Ehlers o León Roldós.

De esta forma, es posible derivar la impresión que la asociación con el PSC procede de una estrategia de largo plazo de la ID: no permitir nunca que surja un partido o un liderazgo alternativo dentro de su "zona" del espectro político. Ello puede implicar, - y no hay óbice para ello-, mantener alianzas coyunturales con los diversos populismos o con partidos de inclinaciones ideológicas supuestamente contrarias. Para la ID sus peores enemigos potenciales son sus similares, no quienes le son drásticamente diferentes. De esta manera, la lógica política de largo plazo de la ID es regida por una racionalidad de repartición feudal-territorial del mapa electoral del país. Esta política no es de hegemonía, ni de búsqueda universalista de una plataforma nacional, sino, al igual que los

partidos populistas o cacicales, de consolidación de un "bastión" electoral cuyo control proporciona los recursos políticos que permitan negociar con poder ante los otros poderes seccionales y corporativos, cuya confusa amalgama constituye el núcleo real del Estado Ecuatoriano, o de lo que pasa por Estado Ecuatoriano.

Por cierto que la ID es en algunos aspectos diferente al PSC o al PRE (por ejemplo). En efecto, si bien puede constatar, al igual que en toda forma de sociabilidad en el Ecuador, la fuerte presencia del fenómeno familístico y clánico; en realidad la ID se reproduce a sí misma por algunos otros mecanismos adicionales. En concreto, la ID ha desarrollado, en las zonas electorales que le son propicias, y, - en algunos aparatos del Estado central-, un estrato de funcionarios y de intelectuales públicos que constituyen una firme base de sostén, a la cual se suman amplias capas de clase media en las ciudades mayores de la Sierra. En realidad, la ID no es un partido sociológicamente social-demócrata: un partido social-demócrata clásico es ante todo un partido laborista, y la clase trabajadora organizada constituye su base política fundamental. En el caso Ecuatoriano, es muy claro que la ID carece de mayor arraigo en la, por otra parte, muy menguada clase obrera sindicalizada del país. Su gran caudal de apoyo parece estar en otros sectores, y palpablemente, en la clase media empleada, y en especial la clase media dentro del horizonte estatal o de las profesiones liberales, que parece serle una base social más afín. La ID, tampoco es, por cierto, el partido de un proyecto so-

cialista (por pálido que este pueda ser). Si pudiese clasificarse a este partido de una manera alternativa a las ideas establecidas, la Izquierda Democrática, debería ser entendido como el partido de la redistribución corporativista estado-céntrica., EL PSC, en cambio podría entenderse como un partido patrimonialista empresarial.

Pero, de todas formas, es evidente que las contradicciones entre la ID y el PSC han tendido a aligerarse, si es que alguna vez fueron realmente fundamentales. Al menos desde que ambos renunciaron a la esperanza de ser partidos nacionales, la colaboración entre ellos se ha hecho cada vez más fluida y fácil, y está basada en un compromiso tácito de ayudarse mutuamente a mantener sus respectivas "zonas reservadas", tanto electorales como económico-políticas. Mientras la ID no amenace la hegemonía Social Cristiana en Guayaquil y no intente seriamente un proyecto de efectiva construcción estatal-universal (a diferencia del estatismo corporativista actualmente dominante en la práctica social-demócrata "a la Ecuatoriana"), y mientras el PSC no intente "penetrar" seriamente en la Sierra y deje márgenes financieros libres para la reproducción de los aparatos burocráticos y de las "intelligencias" profesionales andinas; no habrá en realidad, una disputa o contradicción de fondo, entre ambas agrupaciones.

La creciente, pero en ningún caso reciente "entente" entre los dos mayores partidos del país (o entre sus líderes patrimoniales), podría incluso estar dando pie para el diseño de un todavía incipiente proyecto consociativo. En efecto,

no sería del todo ilusorio imaginar un acuerdo bipartidista de co-gobierno, mediante el cual ambos partidos intentarían alguna versión local del "Frente Nacional" Colombiano de hace 40 años. La legitimación de semejante acuerdo podría fácilmente basarse en la necesidad de impulsar y consolidar la "gobernabilidad", tema por lo demás de creciente importancia para amplios estratos de la "intelligentsia" cercana a la centro-izquierda (a pesar de que, en general, y en muchos otros países; la obsesión con la pretendida "ingobernabilidad" es un tema más bien conservador). Este acuerdo, podría revestir varias formas, pero implicaría de hecho la entrega del control de la Costa al PSC y de la Sierra y amazonía a la ID. Ambos partidos podrían llegar a un acuerdo para "turnarse" en el ejercicio del poder a nivel nacional, pero, siempre bajo el entendido de que este poder "nacional" debe ser progresivamente despojado de su capacidad autónoma de acción, y debe ser lotizado entre los poderes regionales, cantonales, seccionales y gremial-corporativos. De hecho sería una consociatividad que bajo la forma ideológica de "descentralización", debería producir un estado central minimalista y concentrar en los gobiernos seccionales, y sobre todo en los grandes municipios, el grueso de las atribuciones políticamente redituables y de las decisiones realmente fundamentales. Con un Estado así castrado, importaría realmente poco cual de los dos socios (o testaferreros terceros) ocupe el Palacio de Carondelet. Ante todo se buscaría asegurar las autonomías bien financiadas de los poderes parciales que cada uno de los

dos partidos reconocería para el otro como posesión y disfrute permanente y estable.

Este pacto consociativo se tendría que hacer al precio, pues, de una especie de "cantonización" o "confederalización" del país, sino de jure, al menos de facto. Y para ello se ha generado una, por ahora, latente ideología de la descentralización; la cual, por cierto, puede ser fácilmente mistificada para cubrir los poderes feudal-cacicales, que de hecho adquirirían un poder casi irrestricto dentro de sus respectivas esferas de influencia local. Con ello, la ID contribuiría a poner definitivo punto final al proyecto modernizador-centralizante de los años setenta y del que ella misma fue parte constitutiva.

En todo caso, es preciso desmitificar la consociatividad. Para algunos analistas y para parte del público informado, la consociatividad se relaciona, con frecuencia, a arreglos altamente estables y racionales que permiten resolver exitosamente profundas divisiones étnicas, regionales, religiosas o ideológicas. Por cierto que el Ecuador podría ser visto como un país donde el potencial de disputa inter-regional e inter-étnica es muy alta. De hecho, es imposible negar que en el país existan al menos dos grandes "secciones" políticas que constituyen verdaderas sociedades profundamente diferenciadas y divididas, sin hablar de las emergentes líneas de fractura basadas en la etnicidad. Por tanto, a primera vista, un régimen de duopolio pactado podría tener un halo atractivo, sobre todo si lo que se lamenta por sobre todas las cosas en el Ecuador, es el bloqueo decisional y las rigideces derivadas de

un sistema de alta volatilidad de las alianzas y de numerosos vetos institucionales y extra-institucionales.

En la práctica lo que se propondría sería no un bipartidismo (otra figura altamente prestigiosa), sino un doble monopolio superpuesto: un partido controlaría hegemónicamente la Sierra y el otro la Costa. En este caso, no se trata de una competencia bipartidista, sino de un "reparto" del territorio entre lo que se aspira sean dos monopolios coaligados, cada uno de los cuales se fortalecería en una región del país. Por tanto, la simplificación del panorama partidista -electoral no derivaría en una competencia más eficiente (donde se podría "gozar" de los beneficios de la gobernabilidad y además de la competencia inter-partidista), sino que tendría todos los problemas e ineficiencias de las situaciones monopólicas.

Para llegar a esta situación "ideal", los dos partidos protagonistas del hipotético acuerdo consociativo, deberían apoyarse mutuamente en eliminar a los competidores regionales o impedir el surgimiento de nuevos "retadores". Esto implica, que el PRE y el PRIAN deben ser sacados de en medio como alternativas en las provincias de la Costa y a la Sociedad Patriótica no se le podría permitir crecer hasta convertirse en una opción andina a la ID. Asimismo, es preciso impedir que la DP "resucite".

El caso de Pachakutik es diferente. Es claro que para la ID, este partido no constituye -al menos por el momento- una amenaza. Esto se debe a que la dirigencia indígena ha optado por mantener al partido como expresión corporativista de las comunidades indígenas, en

vez de optar – como pudo ser en algún momento, y sobre todo en el período de la alianza con el Movimiento Nuevo País de Freddy Ehlers-; por intentar ser la base de un movimiento político capaz de convocar a capas más amplias de la población. Pachakutik y la CONAIE han escogido, en cambio, defender la pureza y la especificidad identitaria de su organización, con lo cual se han cerrado las puertas a toda posibilidad futura de aspirar a un rol político universalista de nivel nacional. Por ello, su aspiración máxima, es por ahora, servir de eficaz herramienta negociadora de las aspiraciones de las etnias indígenas y de algunos movimientos sociales muy específicos que son compañeros de ruta. Un Pachakutik “puro”, no puede aspirar a tener más del 6-8% de la votación nacional, y si bien puede controlar tres o cuatro provincias serranas, no existe ningún peligro de que pueda ser un contendor serio por la hegemonía regional. De esta forma, la ID puede más bien, y con toda comodidad, tolerar y aceptar al movimiento indígena como un socio menor, dejándose abierta la puerta para un ulterior proceso destinado a desmontarlo como alternativa independiente, una vez que la social democracia haya liquidado a competidores más serios y peligrosos.

El problema de Pachakutik

Quedan por discutirse las motivaciones y estrategias que podría tener Pachakutik para asociarse con los Social Cristianos en el intento de deponer al presidente Gutiérrez. De nuevo, puede parecer extraño que el movimiento indígena escoja como su aliado a un parti

do profundamente ajeno y consustancialmente hostil a todo aquello que Pachakutik parece, dice y quiere representar.

Para entender esta afinidad, que, en cambio, y a diferencia de lo que ocurre entre la ID y el PSC, parece encarnar una efectiva novedad y una seria inflexión en la trayectoria política de Pachakutik y de la CONAIE; es preciso tener en cuenta al menos estos tres elementos de juicio:

a) La traición del Presidente a la CONAIE y a la dirigencia indígena en Agosto del año 2003, ha dejado una herida de resentimiento y de sed de venganza tanto más hondas cuanto que el movimiento indígena llegó a hacerse serias ilusiones respecto a la posibilidad de co-gobernar con Gutiérrez. La decisión del Coronel de acercarse a los Social Cristianos hace ya más de un año, y las estrechas relaciones que ha mantenido con los Estados Unidos y con las agencias financieras multilaterales han sido vistas por Pachakutik como prueba de una malévola duplicidad. Esto define un ánimo subjetivo de retaliación, que por momentos puede ser casi obsesiva. Por otra parte, el movimiento indígena no ha logrado aún superar los fantasmas del “golpismo” del 2001. El 21 de Enero sigue siendo un momento mítico constituido de identidad y mantiene viva la vigencia de un “golpismo” indígena. Por otra parte, en la cultura política de la dirigencia étnica, los valores del constitucionalismo democrático se hallan poco arraigados, y existe respecto a ellos una visión puramente instrumental y externa.

b) Pachakutik está en una situación de “juego de suma constante” electoral

con la Sociedad Patriótica. Contrariamente a lo que ocurre con la ID, el PSP sí puede entrar en los bastiones electorales de Pachakutik y erosionar sus bases de apoyo. Esto es especialmente cierto en la Amazonía, pero el clientelismo de tipo mecenal que intenta el PSP puede también tener éxito en otras regiones. La pesadilla de Pachakutik es que en el tiempo de gobierno que le queda, Gutiérrez pueda terminar de montar una dadivosa máquina electoral neo-patronal, que puede arrebatarles a los dirigentes étnicos el control de sus bases y de sus comunidades, pasando los votos indígenas a ser controlados por un aparato mestizo-pueblerino alienante. Esta amenaza es real y puede ser mortal para el proyecto de un partido étnico coherente y capaz de gravitar autónomamente en las decisiones políticas a niveles regionales y nacionales. Un indicio en ese sentido puede verse reflejado en el hecho de que, en los recientemente celebrados comicios seccionales, el PSP logró sus mejores resultados electorales precisamente en muchas zonas donde Pachakutik debería ser más fuerte. Pachakutik perdió votos en algunas provincias serranas y amazónicas, y en ellas también fue más fuerte la votación de la Sociedad Patriótica.

c) Por último, el Gobierno y sus agentes se hallan abiertamente involucrados en una estrategia por dividir y balcanizar al movimiento indígena. El nombramiento de Antonio Vargas como Ministro de Bienestar Social y la continua presión oficial para clientelizar y captar el apoyo de dirigentes indígenas de base, son vistos con profunda alarma. Esta amenaza es concreta, inmedia-

ta y claramente vinculada a la permanencia de Lucio Gutiérrez en la Presidencia de la República. Para Pachakutik la caída de Gutiérrez se presenta no tanto como parte de un proyecto de hegemonía o de poder, sino como un asunto de elemental supervivencia.

Dé esta manera, se hace al menos comprensible el motivo que impulsa a Pachakutik a asociarse al dúo ID/PSC. Simplemente el movimiento indígena tiene su propia agenda con Gutiérrez, y se halla seriamente necesitado de apoyos que le permitan mejores perspectivas de éxito en lo que cada vez más se perfila como una lucha por la pura y llana supervivencia. De hecho, es significativo, que entre los diputados que defecionaron de la acusación parlamentaria contra el Presidente, los más numerosos, tanto en términos relativos como absolutos, fueron los de Pachakutik. Es evidente que el Gobierno ha detectado la fragilidad de las lealtades en este sector, y su enorme vulnerabilidad al clientelismo, y sobre ese talón de Aquiles se encuentra trabajando. Es preciso tener presente que para comunidades muy pobres, el valor o utilidad marginal de pequeñas prestaciones y dádivas es enorme y mucho más grande su impacto, que lo que es para otros grupos, más prósperos y mejor establecidos en la economía moderna. Para las bases indígenas el valor real de los presentes Gubernamentales es mucho más considerable y la tentación de aceptarlas y recibir las, a cambio de apoyo político, es mucho más potente que para casi cualquier otro grupo. Los operativos de la Sociedad Patriótica lo saben muy bien, y sobre eso trabajan eficazmente.

Reflexiones finales

El intento de destituir legalmente al Presidente Lucio Gutiérrez, no ha prosperado- al menos momentáneamente-, sin embargo, es posible preguntarse por las consecuencias políticas que este hecho puede tener. En primer lugar es evidente que el Presidente depende ahora más que nunca del apoyo de los "patriarcas" del PRE y del PRIAN, y que sus políticas sucesivas, se verán afectadas profundamente por la necesidad de satisfacer las demandas que éstos, sin duda, le harán. Ellas tienen que ver, con el reparto prebendal de recursos públicos, pero, asimismo con la tan anhelada y, hasta ahora esquiva-; ambición de Abdalá Bucaram y de Alvaro Noboa de quebrar, o al menos reducir el control que León Febres Cordero ha venido ejerciendo sobre la judicatura y los organismos de control. Obviamente, esto es indispensable, no solo para el retorno de Bucaram al Ecuador, sino también para poder alejar el permanente chantaje y extorsión que sobre sus posibilidades políticas futuras implica la hegemonía social cristiana sobre los aparatos reguladores y arbitrables del Estado ecuatoriano.

Lo que se avizora es una lucha áspera y cerrada entre el Presidente y el bloque de partidos y personeros que lo apoyan, contra la dupla de la ID/PSC, en un esfuerzo por imponer cada cual su propio proyecto de estabilización hegemónica en el sistema político ecuatoriano.

Al margen de este conflicto- que probablemente se expresará en la lucha por el control de la mayoría parlamentaria, de las posiciones directivas del

Congreso; de los organismos reguladores y del poder judicial y en suma, en una resurrección oportunista y oportuna del tema de la reforma política-, es posible por ahora constatar cuales son las lógicas y racionalidades que subyacen al conflicto generado en torno al juicio político intentado en contra del Presidente Gutiérrez. Y lo que queda claro, es que, en estos momentos, la ID y el PSC se han convertido en guardianas de un orden político en el que su papel es central, y en la cual podrían aspirar a convertirse en una coalición consociativa dominante. La alianza establecida por estos partidos en contra de Gutiérrez se arraiga en poderosas motivaciones estratégicas de antiguo origen y por tanto, no pueden entenderse como resultado de caprichos momentáneos o de disputas coyunturales. Los factores personales, en definitiva, solo juegan un rol importante si la estructura de la situación es tal que permita que el papel de los humores pueda tomar importancia.

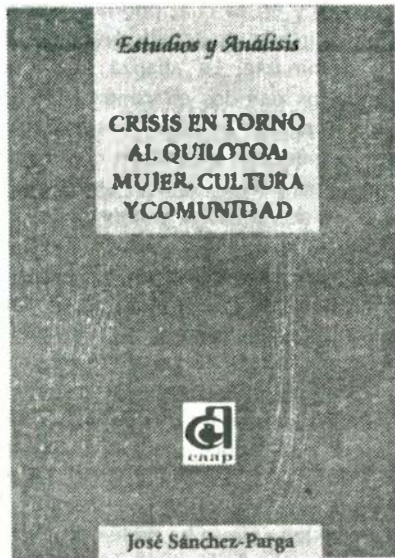
Cabría, para completar el análisis, preguntarse por las estrategias y objetivos de los partidos que han venido apoyando al presidente Gutiérrez. Sin embargo, ello sería asunto de otro artículo. En éste tan solo se ha pretendido entender la lógica de la alianza y de la decisión destinada a intentar el derrocamiento legal del presidente Gutiérrez. Se ha tratado de demostrar que los diferentes protagonistas han sido movidos por motivaciones harto diferentes entre sí, y que se desprenden de la diferente naturaleza sociológica y política de su reproducción, de su accionar y de sus dirigencias. Es de esperar, en vista de lo discutido en este artículo, que la naturaleza del conflicto vaya más allá de lo

coyuntural y que a pesar de ello, la naturaleza de las apuestas de cada cual, sea diferente, coincidiendo tan solo en que, por motivos muy distintos entre sí, para los tres partidos coaligados la presencia de Gutiérrez en el poder es o un

grave obstáculo a su sostenimiento como fuerzas dominantes o una verdadera amenaza a su supervivencia misma como organizaciones y como formas importantes de liderazgo político.

PUBLICACION CAAP

CRISIS EN TORNO AL QUILOTOA: MUJER, CULTURA Y COMUNIDAD



Que ha ocurrido en la comunidad andina durante los últimos 20 años? Como los procesos de descomunalización han afectado la desintegración de la familia, alterado las relaciones entre sus miembros, las nuevas condiciones de la mujer indígena y la situación de desamparo de los niños y adolescentes

José Sánchez Parga

A estas interrogantes trata de responder la investigación del libro que se publica, que indaga también las transformaciones en la comuna indígena, los desplazamientos del poder y la autoridad hacia organismos externos a la comuna, las nuevas formas de participación y sobre todo los procesos culturales, las violencias, la conflictiva búsqueda de identificaciones y el reprocesamiento de las identidades, procesos que se combinan muy contradictoriamente con programas de educación intercultural